

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
DIRECCION DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE EXTENSION CULTURAL
CARACAS

No.

CONCEPCION ECONOMICA DE LA REFORMA AGRARIA

Conferencia pronunciada por el Dr.

Salvador de la Plaza

en el Foro sobre Reforma Agraria organizado
por la Dirección de Cultura de la
Universidad Central de Venezuela,
conjuntamente con el
Colegio de Médicos Veterinarios de Venezuela.

Caracas, junio de 1966.

Concepción de la Reforma Agraria

Hace 26 años, en 1940, visitó nuestro país una misión técnica norteamericana presidida por el Profesor Manuel Fox, Durante su estadía, realizó minuciosas investigaciones y en su informe asentó, entre otras, la siguiente conclusión:

"Venezuela tiene riquezas naturales magníficas que aún no han sido desarrolladas enteramente. La situación es única en su género, visto que Venezuela tiene probablemente los más ALTOS INGRESOS gubernamentales "per-capita" en el mundo, SIN DEUDA INTERNA (ni externa). Sus nacionales, sin embargo, SON POBRES y los efectos de la pobreza se manifiestan en todas partes..."

Qué causas habían determinado realidad tan objetiva y concretamente interpretada por los técnicos norteamericanos?. Contestando a esa pregunta dictó en febrero de 1944 una conferencia en el ciclo que en esta nuestra Universidad Central había organizado la "Sociedad de Estudios Económicos y Sociales". La titule: La Reforma Agraria: Base de la planificación de la Economía Nacional" y en ella sostuve, con fundamento en cifras y hechos, que la pervivencia de la forma de apropiación de la tierra heredada de la Colonia y la mediatización y dependencia en que nos había mantenido el capital extranjero, eran las causantes de que nuestro país no se hubiera desarrollado económicamente y, por tanto, del atraso social y político en que nos debatíamos. Concluí mi conferencia afirmando que para superar ese atraso y salir del sub-desarrollo, impulsar y construir una economía propia e independiente, se hacía impostergable la realización de una profunda Reforma Agraria.

Ni la arbitrariedad ni la improvisación o imitación son reglas en el desenvolvimiento social y político, ya que quien lo determina en cada sociedad es el desarrollo de su propia estructura económica, al que rigen leyes que el hombre no ha inventado, sino sencillamente constatado y comprobado en la práctica diaria.

"....en la producción social de su vida - nos enseña Marx- los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es

la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social..."(Marx, Prólogo de la "Contribución a la Crítica de la Economía Política", Enero 1859.-"

No ha sido pues -como algunos lo han propalado- que, debido a idiosincrasias del pueblo venezolano o a que en etapas determinadas de su historia controlara el poder político una "oligarquía goda" y en otras una "oligarquía liberal" y más recientemente "grupos andinos", Venezuela se encuentre, todavía en 1966, en situación de sub-desarrollo y en ella imperen prácticas sociales y políticas que rivalizan en barbarie con las en uso en tiempos del tenebroso Juan Vicente Gómez. Ello tiene su origen en que por haber permanecido inmutable la forma de apropiación de la tierra en que se sustentaba la sociedad cuando nos independizamos de la Monarquía española, no se produjeran transformaciones de fondo en su estructura económica y no fueran liberadas sus fuerzas productivas y a que, por otra parte, el capital extranjero, cuya penetración en el país comenzó desde mediados del siglo pasado, al succionar y exportar a sus países de origen la riqueza que con su trabajo creaban los campesinos y asalariados venezolanos, impidió se acumulara en el nuestro el capital nacional necesario para impulsar su desarrollo económico.

Toda economía para su desarrollo, independientemente del régimen de distribución de la riqueza que la defina -capitalista o socialista-, requiere de una sostenida acumulación de capital nacional. Las actuales grandes potencias imperialistas se generaron en aquellos países en los que sus clases dominantes ascendentes acumularon grandes cantidades de capital no sólo explotado exhaustivamente a las respectivas masas de trabajadoras -la cruenta "acumulación primitiva",- sino también succionando a los hoy pueblos sub-desarrollados la riqueza que producían con su trabajo, convirtiéndolos en mercados para sus excedentes de producción y en sus proveedores a bajo costo de materias primas vegetales o extraídas de sus subsuelos. Los países socialistas - y en la garantía que conllevan de paz y bienestar para la humanidad- resolvieron el problema de la acumulación de capital necesario para asegurar el desarrollo de sus economías, planificando la producción y la distribución de ésta entre los mismos productores y sincronizando armoniosamente las actividades agrícolas con las industriales.

Los países sub-desarrollados -coloniales, dependientes o independientes formales, Venezuela entre éstos últimos- se caracterizan -insistimos- por la pervivencia en ellos de atrasadas estructuras agrarias y por la expoliación y extorsión de que son víctimas -directa o indirecta de "Alianzas para el Progreso"- por parte de potencias imperialistas. Liberar sus fuerzas productivas en el campo mediante la sustitución de la atrasada estructura agraria por otra que se fundamente tanto en la redistribución de la tierra entre quienes la trabajen y en la generación de correspondientes relaciones de producción como en la incorporación de la población campesina en su conjunto al proceso de la producción, es la acción básica para impulsar su desarrollo económico y condicionar y cohesionar las fuerzas que los independizarán de la mediación extranjera.

Tal planteamiento que parte de las causas que determinan el sub-desarrollo y que interpreta la redistribución de la tierra -acción imprescindible para la sustitución de la atrasada estructura agraria- como

"...un catalizador que en una reacción en cadena, cambia los patrones de distribución del ingreso y de disponibilidad y utilización de los recursos, altera la estructura y composición de la oferta y la demanda, ejerce un profundo impacto sobre las tasas de crecimiento de la población y de formación de capital y, en general, libera fuerzas que afectan positivamente los variables más importantes de una economía..." Edmundo Flores, Profesor de Economía Agrícola de la Universidad de México.

Tal planteamiento lo calificamos de Concepción Económica de la Reforma Agraria y ello para diferenciar sustancialmente esta concepción de las que, denominadas idealistas, jurídicas y agrícolas, han sido en el tiempo elaboradas y expuestas por diversos autores, persiguiendo unos dar satisfacción moral o llegar a las reivindicaciones de tierra que las masas campesinas han planteado como medio de liberarse de la miseria, de los despojos y de la explotación de que han sido víctimas en el curso de la historia y, otros, el aumento de la producción agropecuaria; concepciones unas y otras que, por ignorar las causas y centrar sus elucubraciones en los efectos, coinciden, invocando la moral, el derecho y las ciencias agronómicas, en reducir la acción reformadora a medidas tendientes a hacer menos dramáticas las condiciones de vida de las masas campesinas o a un mejor uso y aprovechamiento de las técnicas avanzadas de producción, conservando la gran propiedad territorial como base de la estructura agraria o, cuando más, la coexistencia de ésta con medianas y pequeñas fincas y cooperativas de producción medidas que por no afectar en su aplicación en la práctica las relaciones de producción y las de intercambio que en el campo han sido la -

fuelle de enriquecimiento de las clases y de los sectores especuladores y usureros que tradicionalmente se han venido apropiando el producto del trabajo de los campesinos, acentúan más bien la anarquía y las contradicciones que obstaculizan un desarrollo nacional y coherente de la producción agropecuaria y, en consecuencia, el desarrollo general de la economía del país.

En torno a la así diferenciada Concepción Económica de la Reforma Agraria concretaremos nuestra intervención, la que dividiremos en dos partes: analizando en la primera como la apropiación latifundista de la tierra, la penetración del capital extranjero y la explotación del petróleo por trust internacionales han incidido, obstaculizándolo, retardándolo, en el desarrollo económico, social y político de Venezuela y, en la segunda, el contenido y proyecciones de la vigente Ley de Reforma Agraria, sin entrar a evaluar la aplicación que de ella han hecho las clases dominantes porque esa será materia de las próximas sesiones de este Foro.

- I -

A comienzos del siglo XVIII, según Humboldt, de los 800.500 habitantes que tenía la Provincia de Venezuela, 184.727 eran de origen europeo -el 26,5%; 151.354 indios puros, de los cuales 60.000 deambulando en las regiones selváticas; 376.614 pardos, mestizos, mulatos, zambos, negros libertos, negros "cimarrones" y 87.500 esclavos negros empadronados, los que en su mayor parte trabajaban las "haciendas" de cacao, café, añil, caña de azúcar, tabaco y los "hatos" de los 658 Jefes de Familia que acaparaban las tierras de agricultura y de ganadería que para esa época estaban apropiadas y se estimaban en unas 15 millones de hectáreas.

Sobre esa estructura de extensas plantaciones y vastos "hatos" trabajados con mano de obra esclava se fundamentaba la sociedad colonial y fué la que al constituirse en 1830, heredó la República, convertidos a su vez en grandes propietarios, a costa de los fundos confiscados a los "realistas" y de tierras baldías otorgadas en premio, muchos de los que habían ascendido a altos rangos militares durante las guerras de Independencia. En ese mismo año las exportaciones totales (cacao, café, añil, azúcar, ganado vacuno) montaron a 8.677.000 bolívares y se importaron artículos manufacturados y alimenticios por valor de 8.188.000 bolívares, En volumen las exportaciones de

café alcanzaron los 3.611.000 kilos, las de cacao 2.280.000 kilos y las de ganado vacuno y sus productos a 1.525 reses, 45.000 cueros de res y 859 kilos de carne salada.

Si oficialmente no sería abolida la esclavitud hasta 1854, el modo de producción esclavista, sin embargo, ya no predominaría, pues la mayor parte de los esclavos destinados a tareas agropecuarias, aprovechando las consiguientes desarticulación y desajustes provocados por las guerras de Independencia, se habían libertado por sí mismos abandonando las "haciendas" y los "hatos", incorporándose unos a los cuerpos de ejércitos tanto realistas como independentistas, internándose otros en las montañas y llanos para emprender sus propios sembradíos u otras actividades para subsistir. Los grandes propietarios, ante la imposibilidad de recuperar sus esclavos mediante el concurso de la fuerza pública, gestiones en las que agotaron no pocos recursos y esfuerzos, optaron por generalizar en sus "haciendas" y "hatos" modos de producción ya parcialmente en uso en la Colonia. En las plantaciones de cacao, de café, de caña de azúcar, reemplazaron la **mano** de obra esclava por la del "medianero", por la del "aparcerero" en los cultivos menores - cereales, tubérculos- y en unos y otros cultivos y en la cría, por la de "peón agrícola", especie de asalariado en condiciones infrahumanas. El "aparcerero" tenía que entregar al propietario de la tierra parte de la cosecha que recogiera -el 1/3, la 1/2 ó el 1/4- según la región o si el propietario suministraba semillas o bestias de labor. Por medio del contrato de "medianería", verbal o escrito, el propietario de la tierra entregaba al campesino "medianero" un lote de montaña para que lo talara y sembrara de cacao o café, con la condición de que las matas que fueran sembradas se repartirían de por mitad, obligado el "medianero" a vender las suyas al propietario al estar en producción y a su requerimiento y a realizar, así como los "aparceros", por exigüos salarios, las labores que en el fundo los fueran encomendados.

Por otra parte, como además de ser exigüos, los salarios se les pagaban con "fichas" sólo cambiables por artículos a altos precios en las "pulperías" que los propietarios de tierra tenían establecidas en sus "haciendas" y "hatos", los "medianeros", "aparceros" y "peones", para poder cubrir sus gastos de subsistencia y lo de sus familias, forzosamente tenían que solicitar de los propietarios préstamos o anticipos a cuenta de labores por realizar o sobre su parte de cosecha o sobre las matas que le corresponderían en la "medianería", deudas que debían ser canceladas totalmente para poder trasladarse a otro lugar y que se heredaban de padres a hijos, quedando de esta manera los campesinos arraigados al propietario de la tierra y a la tierra

en que trabajaban. El aparato represivo del Estado se encargaba de velar y de hacer cumplir esos compromisos, vigente como estaba una Ley que establecía la prisión por deudas. Todavía en 1936, en algunas regiones, se pagaba el trabajo con esas "fichas" a pesar de haber sido prohibido su uso desde tiempos de Guzmán Blanco y en el Zulia se compraban y vendían indígenas para los trabajos agrícolas.

Con el sistema de la "medianería" los propietarios de tierra aumentaron no sólo el número de matas de café o cacao en sus "haciendas", sino también, a costa de los baldíos colindantes, la superficie de las mismas. Si el Catastro nacional de tierras, repetidamente decretado, aún no se ha levantado, ello se ha debido a que los grandes propietarios siempre se han opuesto a que les verifiquen los linderos de sus fundos y así sean recuperadas para la Nación las porciones de tierras baldías que le han sido usurpadas.

Esos nuevos modos de producción expresaron la transición del sistema esclavista al sistema de economía semi-feudal que predominaría en el país hasta muy reciente época y que con relación al esclavista favoreció, sin embargo, cierto aumento de la productividad del trabajo, como lo comprobó el volumen de las exportaciones. En 1854, año de la abolición "legal" de la esclavitud, las de café habían quintuplicado (16.800.000 kilos) y las de cacao doblado (3.900.000 kilos). En 1884/85 las de café y cacao conjuntamente alcanzaron los 46.700.000 kilos. El valor total de las exportaciones, excluido las de oro, montó a 53.500.000 bolívares y el de las importaciones a -- 58.710.238. Es de advertir que desde el año 1867 se habían estado explotando en Guayana unas minas de oro, alcanzando el valor acumulado de la exportación de ese metal hasta el año 1884/85 a 150 millones de bolívares, ingresos que originaron cierta "prosperidad" que Guzmán Blanco aprovechó para "modernizar" a Caracas, para "atraer" a los inversionistas extranjeros y para fletar empréstitos con cuyo manejo se enriquecieron determinados grupos de las clases dominantes de entonces.

Pero esa "prosperidad" se limitó a Caracas y al grupo de burócratas y paniaguados que se enriquecieron a la sombra de Guzmán Blanco pues el desarrollo económico general del país continuó estacionario por haber Guzmán Blanco, para apoderarse del poder y conservarlo, liquidado el movimiento de transformación de la estructura agraria latente en las prolongadas y cruentas guerras federales y por haberse convertido, a su turno, en gran propietario de tierras despojando a la Universidad de sus grandes y ricas haciendas.

A ese estancamiento contribuiría, agravándolo, la instalación en el país desde mediados de siglo de poderosas Casas Comerciales extranjeras, principalmente alemanas, las que por haberse convertido en banqueros financiadores de los grandes hacendados y ganaderos -precisamente lo que se pro-

pone repetir ahora el Bank of America financiando a los "empresarios privados" de Portuguesa- consolidaron y fortalecieron la estructura de la gran propiedad agraria e impidieron se acumulara capital nacional. En efecto, - esas Casas Comerciales mediante anticipos y préstamos en dinero efectivo que hacían a los grandes propietarios de tierras, así como suministrándoles artículos manufacturados o no para que surtieran las "pulperías" que tenían en sus "haciendas" y "hatos", lograron no sólo acaparar las cosechas de café, de cacao, de ganado, monopolizando así el comercio de importación y el de exportación de nuestros principales frutos, sino que por pagarles precios inferiores a los que regían en el mercado internacional, venderles a altos precios los artículos importados y cobrarles leoninos intereses por el dinero que les prestaban, obtenían cuantiosas utilidades que remesaban a sus Casas Matrices en el exterior, succionando de esta manera al país la poca riqueza que con su trabajo creaban los campesinos y asalariados. Muy ilustrativo a este respecto es lo que dejó expuesto en su Memoria de 1868 el titular de la Cartera de Fomento:

"Nadie ignora que los venezolanos por punto general carecen de capitales circulantes, La agricultura, por ejemplo, de frutos mayores, depende enteramente del COMERCIO EXTRANJERO, de él recibe con elevado interés los fondos que ha menestar para la limpia de las haciendas, recolección de las cosechas y sustento diario de las familias. Por consiguiente, el agricultor se encuentra forzosamente sometido a la LEY DEL PRES-TADOR no sólo en cuanto a la utilidad o precio del dinero, sino con respecto del valor mismo de los frutos. Si al cambiarse éstos en país extraño, se obtiene alguna ganancia, de seguro que ella no cede en provecho del productor. Apenas habrá algún propietario con aptitud de sacudir la tutela mandando él mismo a otra parte las producciones de su finca. Una cosa parecida tiene efecto con las demás producciones. Y he aquí otra de las causas del malestar de tantos cultivadores..."

No obstante tan acertada y dramática apreciación, fueron planteadas como soluciones: aumentar la producción agropecuaria mediante la creación de incentivos a los inversionistas e inmigrantes extranjeros y la instalación de colonias agrícolas; muy parecidas, por cierto, a las que hoy proponen, como "novedades", los señores de la "libre empresa" y algunos personeros del Estado. En aquella época crearon dos Colonias, una en Altagracia de Orituco a la cual bautizaron "Guzmán Blanco" y la otra en Araira, entre Guatire y Caucagua, la "Colonia Bolívar", en la que inmigrantes italianos cultivaron hasta 2.000 hectáreas.

Se sucedieron los alzamientos y guerras civiles, expresiones de las disputas entre sí de los grandes propietarios de tierra por el control del poder político local o nacional, con breves intervalos de simulacros electoreros y sesiones tormentosas de Congresos que, como el actual, se proclamaban **representar** la "voluntad" del pueblo y, en 1908, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, se apoderó del poder Juan Vicente Gómez, quien tiranizaría al país durante 27 años y devendría el más grande propietario de tierras - haciendas y hatos- conocido hasta entonces.

En 1912 la población del país alcanzaba a los 2.754.000 habitantes y en el año 1914/15 en que comienza la Primera Guerra Mundial, las exportaciones de café y cacao montaron a 67.734.000 kilos, siendo el valor total de las Exportaciones de 103.626.000 bolívares y el de las importaciones de 59.000.000 bolívares, cifras éstas que si las comparamos con las ya citadas de 1884/85 revelan que en los 30 años que habían transcurrido el desarrollo económico del país continuaba estacionario, debido a la pervivencia de la atrasada estructura agraria y a que no se había acumulado capital nacional porque, no obstante los saldos favorables de la Balanza Comercial, en el valor de las exportaciones iba incluida la transferencia al extranjero de la riqueza que con su trabajo creaban los campesinos y asalariados venezolanos y que al país succionaban las Casas Comerciales extranjeras.

Con la iniciación desde 1912 de los trabajos en busca de petróleo, comenzó a resquebrajarse el sistema de las extensas plantaciones y de los vastos hatos, ya que los latifundistas no podrían continuar contando, como hasta entonces, con la requerida mano de obra servil, pues tanto las labores de exploración y de explotación del petróleo traerían -como ocurrió- hacia los "campos petroleros" **grandes contingentes** de campesinos. De igual manera afluirían los campesinos hacia las ciudades porque el Estado, al disponer de mayores ingresos, los provenientes de la entrega de los yacimientos petroleros, ampliaría su propio aparato y dedicaría sumas cada vez más importantes a la realización de obras públicas, a la ampliación y creación de nuevos servicios. Los mismos grandes propietarios de tierra, sin proponérselo, expresaron con la queja de que "el petróleo y las obras públicas eran las causas que los obligaban a abandonar las haciendas de café, de cacao y los hatos", la verdad de lo al latifundismo estaba ocurriendo, pues los siervos del campo, cuya explotación exhaustiva les había asegurado la jugosa renta que les daba poder económico y político, habían iniciado su éxodo hacia lugares en los que creían iban a encontrar una mayor remuneración por su trabajo y liberación del yugo y de los vejámenes que les infligían sus seculares explotadores.

Pero la explotación del petróleo, por el hecho de que en lugar de ser realizada directamente por la Nación lo fuera desde sus comienzos por trusts extranjeros, no liquidaría la atrasada estructura agraria, aunque distorsionándola como hemos visto, ni tampoco impulsaría transformaciones progresis-

tas de la economía. Desde 1917 y debido a las formas mas agresivas de penetración del capital extranjero y al destino que el Estado daba al ingreso petrolero, el abastecimiento del país en artículos manufacturados y alimenticios dependería cada vez más del exterior, así como más profunda devendría la mediatización de su economía. Habían comenzado a coexistir en el país dos economías en violenta contradicción y antagonismo; la altamente tecnificada del petróleo ensamblada en las economías de los países de origen de los --- trusts y orientada por la obtención de los mayores beneficios para esos países y, la propiamente nacional, basada en la atrasada estructura agraria y entorpecida en su normal desarrollo tanto más profundamente cuanto que contra la distorsión que provocaba la coexistencia, no se tomaban las medidas requeridas para liquidar la pervivencia de la atrasada estructura agraria ni para impulsar un desarrollo autónomo que aprovechara al máximo lo que al país ingresaba por concepto de la explotación del petróleo. Esos ingresos, o sea, las divisas que los trusts petroleros traían para el pago de salarios, de impuestos, para gastos, etc. en lugar de quedarse en el país, así como entraban escapaban al exterior para cubrir el pago de las importaciones. Si todavía en 1917 la Balanza Comercial se cerró con saldo favorable, diez años después, en 1926, mientras las exportaciones excluidas las de petróleo aumentaron ligeramente al colocarse en los 158 millones de bolívares, las importaciones quintuplicaron al alcanzar más de los 433 millones de bolívares, siendo sustituido el superavit en la Balanza Comercial por un déficit de 275 millones de bolívares, déficits que en los sucesivos años crecerían a saltos y que por la composición de las importaciones -productos alimenticios y artículos manufacturados de consumo inmediato- sería la prueba irrefutable del **estancamiento** en que se mantenía la producción agrícola, de la incipiencia del desarrollo industrial y de la peligrosa dependencia del país al capital extranjero.

La derrota de la Alemania Imperial en 1918 y el encumbramiento de los Estados Unidos a primera potencia imperialista mundial, se reflejarían en Venezuela por una parte, en un pronunciado decline de la producción agropecuaria, ya que al ser afectadas por la guerra las Casas Comerciales extranjeras, la desorganización y posterior suspensión del financiamiento que prestaban a los grandes hacendados y ganaderos, distorsionaría aún más el sistema imperante de producción agropecuaria, al que Juan Vicente Gómez intentó apuntalar con créditos y subsidios a los latifundistas y, por la otra, que Venezuela se convertiría gradualmente en apéndice de la economía imperialista yanqui al pasar el control de nuestra economía a manos de los trusts norteamericanos tanto como acaparadores de la compra de nuestros frutos de exportación como del suministro de **maquinarias**, artículos manufacturados y alimenticios, a más de ejercer la hegemonía de la explotación y distribu-

ión del petróleo.

A la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1936, las importaciones alcanzaron los 187 millones de bolívares y las exportaciones, excluidas las de petróleo, a 71 millones, cerrándose la Balanza Comercial con un saldo en contra de 116 millones de bolívares. Las exportaciones de petróleo ya montaban en ese año a 676.769.078 bolívares.

De la Memoria del Ministerio de Hacienda -1936-1937- transcribimos párrafos que sintetizan la situación económica de entonces:

"Desde el punto de vista exclusivamente económico, con un Tesoro que alcanzó para la fecha citada -1 de enero de 1936-, a casi cien millones de bolívares, la agricultura, las industrias y el comercio se hallaban en la más completa postración. Esa situación de un Estado agitado en un pueblo exhausto acarrearía embarazosas consecuencias, de las que hoy aún se reciente la vida nacional. Es grande el número de venezolanos aptos para las más diversas actividades, a quienes la pobreza de los recursos privados, empujaba y empuja todavía hacia los puestos públicos, como un último refugio contra la miseria, de cuyas garras no pueden salvarlos las escasas posibilidades que ofrecen nuestras fuentes de producción y de intercambio. El sistema de privilegios indebidos y la absorción, por unos pocos, de aquellos negocios y trabajos que debían ser el libre patrimonio de todos los habitantes del país, contribuyeron a agravar singularmente la crítica situación creada por la baja de nuestros frutos en los mercados extranjeros. Y así, cuando el nuevo Gabinete asumió la administración del país, encontró que los campos estaban semi-abandonados, que la industria languidecía y que el comercio se hallaba amenazado de ruina..."

Y defendiéndose de las críticas que habían sido expresadas en torno a los crecidos gastos públicos, el Ministro agregaba:

"Esa considerable diferencia en favor de los egresos, que pudiera ser juzgada a primera vista como expresión de una política poco previsora, no lo ha sido si se toman en cuenta todas las circunstancias que caracterizaron el año, durante el cual hubo de atenderse a apremiantes necesidades. El pueblo venezolano se hallaba, desde luego, acosado por muchas urgencias y vivía como en una suspensión de los más elementales menesteros. La agricultura y la cría se encontraban extendidas y no existían los organismos adecuados para preparar y ejecutar metódicamente una campaña nacional en todos los sentidos y los cuales era preciso atender.. (.....).. Venezuela es una Nación que, aunque plotórica de recursos casi vírgenes, disfruta sólo de una riqueza que no es sino una parte muy pequeña de la que está llamada a desenvolver en el porvenir. Y para sacar a luz esas riquezas, ha de preparar previamente el terreno, realizando

obras gigantescas del más variado orden. Los gastos que en ese sentido se hagan tendrán una reproducción del mil por uno, si se hacen con acierto y eficiencia...(...)...Con este criterio el Ejecutivo está dispuesto a invertir íntegramente los recursos fiscales en obras que redunden positivamente en beneficio de la prosperidad nacional..", párrafo éste que más bien parece haber sido transcrito de las últimas Memorias de los actuales Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas.

En 1937 se realizan los primeros Censos Agropecuarios y sus resultados evidenciaron la realidad de la estructura agraria atrasada y, particularmente, de la pervivencia de la apropiación latifundista de la tierra. De los ---- 90.000.000 de hectáreas de la extensión territorial del país, según ~~1936~~ censos, 23.370.299 estaban apropiadas por particulares y en poder de la Nación (baldíos) y de los Municipios (Ejidos y propios) las restantes 67.369.701 hectáreas.

Los 23.370.299 hectáreas apropiadas fueron clasificadas por los Censos en tierras de agricultura - 3.437.694- y tierras de ganadería -19.932.605-, clasificación que guarda relación con la geografía y composición de los suelos del país, así como también con la ubicación y distribución de la población, la que desde la Colonia vivía principalmente asentada -en 1936 en un 63%- en la décima parte del territorio, la Zona llamada Centro-Costera.

Por ser esa zona la más densamente poblada y cultivada, las cifras a ella relativas son las que orientan cualquier apreciación o interpretación de la verdadera realidad del país. Así, por ejemplo, en los Estados Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y el Distrito Federal, con una población de 1.855.126 habitantes, el 55% de la total del país (Censo de Población de 1936), de su extensión territorial de 7.683.000 hectáreas, estaban apropiadas 3.284.193 (fundos agrícolas y pecuarios). Pero veamos brevemente los datos concernientes a todo el país.

Los 3.437.694 hectáreas de tierras de agricultura censadas, las detentaban 59.014 propietarios en la forma siguiente:

			<u>Propietarios</u>		<u>Hectáreas</u>	
Entre	1/2 y	1	Has.	1.228	649,6	
"	1 y	2	"	5.335	6.515,6	
"	2 y	5	"	16.538	51.180,8	
"	5 y	10	"	<u>14.697</u>	<u>97.313,4</u>	
				37.798	(64,0%)	155.659,4 (4,5%)
"	10 y	100	"	<u>17.962</u>	(28,7%)	<u>466.376,0</u> (13,5%)
"	100 y	1.000	"	2.714	(4,5%)	736.970 (21,0%)
"	1.000 y	10.000	"	500	(0,8%)	1.222.254 (35,5%)
"	10.000 y	50.000	"	<u>40</u>	(0,06%)	<u>856.434</u> (24,9%)
				3.254	(5,4%)	2.815.658 (81,0%)

Es decir, que mientras el 5,4% de los propietarios detentaban el 81,0% del total de la tierra de agricultura apropiada, el 64% de los propietarios, los pequeños propietarios, sólo detentaban el 4,5% de la tierra. Se observará así mismo que 40 propietarios entre 10.000 y 50.000 hectáreas, ellos solos, detentaban 856.434 hectáreas, cinco veces más tierra que los 37.798 pequeños propietarios y casi el doble de los 17.962 medianos propietarios.

Los Censos revelaron otra realidad del atraso de la estructura agraria, pues de los 3.437.690 hectáreas de tierras de agricultura apropiadas, sólo estaban cultivadas 1.119.974, permaneciendo, por consiguiente, ociosas 2.317.716 no obstante los cientos de miles de familias campesinas en capacidad de ponerlas en cultivo. De las cultivadas, 418.432 -el 37,3%- lo estaban de café y cacao; 35.914 de algodón, tabaco, sarrapia, coco y 655.628 con maíz, caraotas, tubérculos -la desestimada actividad productiva de nuestros "conqueros"- dependiendo, por tanto, para alimentarse cinco venezolanos de solo una hectárea cultivada, lo que explica por una parte que la mayoría de la población se encontrara en situación de hambre permanente y, por la otra, que se apelara a importar del exterior grandes cantidades de alimentos para abastecer a la población urbana.

Los 19.932 605 hectáreas de tierras de ganadería las detentaban 10.763 propietarios en la forma siguiente:

				<u>Propietarios</u>	<u>Hectáreas</u>
Entre	1/2 y	1	Has.	30	16
"	1 "	2	"	240	276
"	2 "	5	"	1.302	3.876
"	5 "	10	"	913	5.957
"	10 "	20	"	883	11.250
"	20 "	30	"	507	11.518
"	30 "	50	"	581	21.233
				<u>4.456</u> (51,4%)	<u>54.126</u> (0,2%)
"	50 "	100	"	742	49.308
"	100 "	250	"	1.027	156.256
"	250 "	500	"	823	299.627
"	500 "	1.000	"	922	647.303
				<u>3.514</u> (32,6%)	<u>1.152.494</u> (5,7%)
"	1.000 "	5.000	"	1.891	4.115.469
"	5.000 "	10.000	"	474	3.044.219
"	10.000 "	50.000	"	374	6.938.596
"	50.000 "	100.000	"	41	2.570.266
"	100.000 "	más	"	13	2.057.431
				<u>2.793</u> (25,9%)	<u>18.725.981</u> (93,9%)

Es decir, que mientras el 25,9 de los propietarios detentaban el 93,9% del total de la tierra de ganadería apropiada, el 51,4% de los propietarios, los pequeños propietarios, sólo detentaban el 0,2% de la tierra. Se observará así mismo que 54 propietarios entre 50.000 y más de 100 mil hectáreas, ellos solos, detentaban 4.627.691 hectáreas, 85 veces más tierra que los 4.456 pequeños propietarios y cuatro veces más que los 3.514 medianos propietarios entre 50 y 1.000 hectáreas.

De las 19.932.605 hectáreas de tierras de ganadería, 15.224.132 estaban cubiertas de pastos naturales y 4.170.004 con selvas y malezas, De pastos artificiales sólo estaban cubiertas 538.468 hectáreas.

Los Censos revelaron que en la Zona Centro-Costera se encontraba el 58,9% de los propietarios de tierras de ganadería, los que detentaban el 9,3% de esas tierras, o sea 1.853.732 hectáreas, mientras que en los Estados deshabitados se encontraba el 40,6% de los propietarios y detentaban 18.078.873 hectáreas, el 90,5% de las tierras de ganadería.

En los Estados Miranda, Aragua, Carabobo, Trujillo y Táchira de los 2.341.912 hectáreas de tierras de agricultura y de ganadería apropiadas, -- 1.829.628 las acaparaban 1.320 propietarios de más de 150 hectáreas y las restantes 512.274 pertenecían a 34.570 propietarios entre 1/2 y 150 hectáreas. Ahora bien, como la población rural de esos Estados era de 687.091 habitantes, tendremos que mientras 35.890 poseían tierra, 651.201 campesinos no tenían ninguna. En el Estado Miranda que circunda al Distrito Federal, de su extensión territorial de 795.000 hectáreas, 655.053 estaban apropiadas -- 388.569 de agricultura y 266.547 de ganadería -- y de ellas, 557.506 -- el 85% -- las acaparaban 406 propietarios de más de 150 hectáreas. De su población rural de 166.926 habitantes, 163.130 campesinos no poseían ninguna tierra.

Como complemento al cuadro de estancamiento económico, recordaremos que de los 3.467.839 habitantes que tenía Venezuela (Censo de Población de 1936), 2.324.452 -- el 67% -- era población rural y 1.143.387 -- el 33% -- urbana. La población ocupada en la agricultura y la cría montaba a 1.038.248 distribuida en 853.179 jornaleros y empleados y 185.069 medianeros y pisatarios y en la industria, comercio y servicios a 103.285 distribuida en 47.863 en la industria, 22.496 en la explotación del petróleo, en el comercio 20.768 y en los servicios 12.156. (Dr. J.I. Baldó, Revista de Sanidad y Asistencia Social Nº 3, junio 1944).

El capital invertido en la agricultura y cría alcanzaba los 1.372 millones de bolívares, mientras que en la industria, incluidos los ----- 456.761.526 bolívares en petróleo, a 751.691.159 bolívares; en el Comercio a 340.798.633 y en los Servicios a 257.895.972 bolívares. Cifras demostrativas de que la producción agropecuaria prevalecía sobre la industrial y que más del 80% de la población ocupada extraía sus medios de vida en las labores de campo

Históricamente y dada la incidencia que hemos visto de la explotación petrolera en los modos de producción que imperaban en el campo, la desaparición de Juan Vicente Gómez debía haber abierto paso al sistema de relaciones de producción capitalistas, pero no ocurrió así porque para la universalización de tales relaciones en escala nacional, debido a su incompatibilidad con la existente apropiación latifundista de la tierra, se requería precisamente que esa estructura fuera liquidada. Y justamente ha sido esa contra-

dicción principal lo que determinó la agudización de las contradicciones secundarias en que se ha estado debatiendo la producción agropecuaria en el país desde 1936. Las plantaciones de café y de cacao, los vastos hatos, como explotaciones semi-feudales, económicamente no podían ya pervivir; estaban condenados a desaparecer. Por tanto, y con respecto a la población campesina que habitaba o trabajaba en esos latifundios, la impostergable necesidad de que fueran fraccionados esos latifundios y redistribuidas esas tierras entre los campesinos y con respecto a la producción agropecuaria, que ésta fuera organizada en acuerdo con las relaciones de producción que determinaría la nueva estructura de apropiación de la tierra.

En poco más de un siglo nuestro país ha recorrido en su desenvolvimiento etapas que llevaron milenios a otros pueblos. Sin embargo, sin haber sido liquidada la etapa esclavista pasamos a la del trabajo servil y de súbito entramos en la capitalista, proceso que se explica por el hecho de la interdependencia que entre las naciones del mundo impuso, desde mediados del siglo pasado, el sistema capitalista en su violenta expansión imperialista. Lo anormal sí fué, que no obstante haber sido desde hacía siglos liquidado en Europa el modo de producción esclavista, lo implantaran en la colonización de nuestra América los conquistadores españoles, portugueses, ingleses y franceses, transportando de Africa, como si fueran bestias de carga, seres humanos que cazaban y esclavizaban en momentos en los que en Europa, en el seno mismo de la sociedad feudal, se estaban generando las condiciones para el advenimiento de la estructura capitalista. En Europa la Revolución Industrial con sus proyecciones en el mundo, las revoluciones social-políticas, principalmente la Revolución Francesa, al liquidar el sistema feudal y las relaciones de producción que obstaculizaban e impedían el avance de la sociedad, creó las bases para el desarrollo y apogeo de las hoy grandes potencias imperialistas. Entre nosotros, concretizando, si la explotación capitalista del petróleo incidió -como vimos- en los modos semi-feudales de producción haciendo ya imposible su pervivencia, por el hecho de que esa explotación fuera desde sus comienzos controlada por trusts que formaban parte y eran apéndices de economías externas imperialistas, en lugar de favorecer la liberación de las fuerzas productivas nacionales, las entrabó, mediatizando, amoldando el desarrollo de nuestro país a los intereses colonizadores de esas economías. La Revolución Industrial liquidó en Europa al feudalismo. La penetración imperialista en nuestro país - las Casas Comerciales extranjeras, las compañías concesionarias de petróleo y de hierro, los inversionistas extranjeros en general-, por el contrario, reforzó en el poder a los grandes propietarios de tierra, los transformó luego en "hombres de empresa", en grandes importadores, en sus agentes de colonización y sumió a la mayoría de la población en la improductividad, obstaculizando así el desarrollo económico propio e independiente de nuestro país.

El éxodo de campesinos hacia los "campos petroleros" y a las ciudades desde antes de la Primera Guerra Mundial y que alentaría, a la muerte de Gómez la erradicación de "las reclutas", del trabajo forzado" en las carreteras y de los "Jefes Civiles" y "Chácharos" que por la fuerza retenían en los latifundios a los campesinos, violentó, con sus propias características, una nueva composición de la población del país al invertir los términos de relación entre la población rural y la urbana. Para el abastecimiento de la creciente población urbana, dado el estancamiento de la producción agropecuaria y la incipiencia de la producción manufacturera, se descansó exclusivamente en la importación de toda clase de artículos, incluyendo y en gran medida los alimenticios, solución anormal que generó a su vez -y es este otro aspecto del problema que reviste interés destacar- que quienes se dedicaban a las actividades importadoras, por su creciente número y fácil enriquecimiento, fueran integrando un sector de las clases dominantes que para aumentar aún más sus cuantiosas ganancias, se aliarían a los intereses extranjeros y presionarían dentro del aparato del Estado para que fuera ampliada cada vez más la política del "gasto público corriente" en detrimento del "gasto público de inversión", ampliación en favor de la cual también presionarían el sector de los "hombres de negocios", hombres de empresa", banqueros, profesionales y altos burócratas para obtener a su turno grandes ingresos con la contratación de obras, el tráfico de influencias, las jugosas comisiones, la elaboración de proyectos y de planes en los que la fantasía siempre ha encubierto el más desenfrenado apetito de lucro.

La lucha entre sí de esos sectores por la apropiación directa o indirecta del ingreso fiscal, principalmente del proveniente de la explotación del petróleo, y por su reparto entre ellos, condicionaría desde la tercera década de este siglo las actividades sociales y políticas de los venezolanos con las consiguientes repercusiones estranguladoras del desarrollo agropecuario e industrial. El incremento galopante del "gasto público corriente" no ha tenido pues, como desde 1936 lo han venido afirmando, para justificarlo, personeros del Estado, el propósito de satisfacer necesidades perentorias del pueblo venezolano, sino la finalidad manifiesta de favorecer tanto el enriquecimiento de los aludidos sectores de las clases dominantes como el reclutamiento de clientelas para los partidos políticos que al efecto han organizado, coadyuvando al mismo tiempo a la más fácil y profunda penetración del capital extranjero.

Por ello que el Ingreso Petrolero, por esa forma en que el Estado desde que se inició, lo ha venido distribuyendo, en lugar de haberse acumulado en el interior del país como capital nacional, incrementara cada vez más las importaciones y escapara al exterior a enriquecer a los países industrializados, arrastrando consigo las demás riquezas que con su trabajo creaban los obreros y campesinos venezolanos.

Se preguntará cómo y por qué las importaciones alcanzaban cifras tan fabulosas no obstante que la mayoría de la población permanecía improductiva y sin recursos para adquirir artículos?. Precisamente esta es una de las expresiones que mejor caracterizan la anormalidad de nuestra estructura económica y cuya explicación se localiza en la composición y profusa diversificación de las importaciones, pues se observará que si el volumen de cada artículo en particular importado -incluidos los alimenticios era relativamente muy reducido en relación al total de la población, sin embargo, resultaba suficiente para satisfacer las necesidades de la minoría de esa población que directa o indirectamente, a través del "gasto público corriente" y de la desigual distribución del ingreso petrolero, contaba con abundantes recursos para adquirirlos, permaneciendo la gran mayoría de la población, en contraste, al margen de esas importaciones: hambre, en harapos, buscando trabajo. Así mismo, por ser tan reducido el número de consumidores de un artículo determinado, fue que el Estado, para que subsistieran, acordó estimular las industrias existentes y las que instalaban los inversionistas extranjeros, mediante grandes erogaciones, exoneraciones de derechos de importación, alza de aranceles, etc. y, no tanto con el fin de protegerlas contra la competencia que pudieran hacerles artículos importados similares, sino para contrarrestar el alto costo de producción por unidad que determinaba el tan reducido número de consumidores. No está de más advertir que de esa anormalidad se aprovecharon -y actualmente en mayor escala se aprovechan- los comerciantes importadores, los pseudo industriales y los "empresarios privados" del campo para enriquecerse especulando con los precios cada vez más elevados que obligan a pagar a los consumidores, especulación que se ha intentado ocultar con el telón de humo del "sacrificio que la población debe pagar para que el país se industrialice". Ultimamente esos mismos especuladores se han organizado en una "Asociación de Exportadores". con la finalidad, según ellos, de impulsar la industrialización del país mediante la conquista de mercados en el exterior. Es verdad lo que se han propuesto es mantener los elevados precios en el interior del país a base de restringir las ofertas de productos con su almacenamiento y exportación y, aprovechando la devaluación del bolívar, obtener ganancias adicionales vendiendo en el exterior los de esa manera logrados "excedentes" artificiales de productos, tales los irritantes casos de los plátanos, de las frutas, de las papas, así como del azúcar, del arroz. Entre otras operaciones, el BAP vendió recientemente en Italia 10.000 toneladas de arroz en nueve millones de bolívares, cuando en los mercados de Caracas obligaban al consumidor a pagar a 1.75 bolívar el kilo y por ese alto precio, la población de escasos recursos forzosamente tuvo que eliminar de su dieta tal alimento.

La historia nos enseña que mientras la mayoría de su población permanezca completa o parcialmente improductiva, ningún país podrá estructurar

y desarrollar su economía nacional, porque tanto la producción agropecuaria como la industrial requieren, para poder prosperar, de consumidores que en el interior mismo del país adquieran los artículos que en él se produzcan. Por ello que en los países sub-desarrollados sea básica la realización de una profunda Reforma Agraria que, al incorporar a los campesinos en conjunto al proceso de la producción, no sólo los libere de la explotación de que son - víctimas por parte de los propietarios de tierra -grandes y medianos- y de los prestamistas usureros y acaparadores locales de productos, sino que al mejorarles sus condiciones de vida, aumentarles sus ingresos y su capacidad adquisitiva, los dote de la posibilidad de adquirir la diversidad de artículos que les son indispensables para satisfacer sus necesidades, derivándose así un franco impulso para la producción artesanal o industrial de las ciudades. La población urbana incorporada a su vez, como consecuencia, de más en más a la producción, dispondrá de mayores recursos para proveerse de alimentos, dependiendo en definitiva el desarrollo económico general del país del incremento que se imprima al intercambio interno de los artículos que produzcan los campesinos, los obreros y los artesanos. La historia también nos enseña, que sólo se desarrollan economías nacionales y los países superan el sub-desarrollo en que los mantienen -aunque sostengan lo contrario los "técnicos" agentes de la penetración imperialista- cuando en el seno mismo de ellos y como consecuencia del intercambio interno de los artículos que produzcan sus obreros, campesinos y artesanos, se acumula capital nacional y que, por el contrario, se empobrecen aquellos países y en ellos no se acumula capital nacional, cuando el capital que se invierte en su producción agropecuaria e industrial es capital privado extranjero, pues éste succiona y exporta a sus países de origen la riqueza que con su trabajo crean sus campesinos, obreros y artesanos. Los países occidentales altamente desarrollados recorrieron la etapa del intercambio interno de los artículos que en ellos se producían hasta que, saturados sus respectivos mercados, tuvieron que -- buscar consumidores en el exterior a sus excedentes de producción para poder mantener el ritmo de crecimiento que cualquier desarrollo económico -capitalista o socialista- requiere para no estancarse o retroceder, para avanzar. Así mismo, acumulado que fué más del capital necesario para garantizar el propio desarrollo, esos países comenzaron a exportar capital transformándose en potencias imperialistas, las que, para arribar a las magnitudes que hoy tienen, sojuzgaron por la fuerza, reduciéndolos a mercados de consumo de sus excedentes y a productores de materias primas a bajo costo, a los pueblos y naciones que hoy se encuentran en situación de sub-desarrollo, Venezuela entre ellos.

Pero el imperativo de que para construir sus propias economías nacionales, los países sub-desarrollados tengan que partir de la base, es decir, de la realización de una profunda e integral Reforma Agraria de la creación de su mercado interior, etc. no presupone que tengan que reunir y llenar idénticas condiciones que los hoy países industrializados y recorrer igual lapso de tiempo al por ellos cumplido. Por una parte los adelantos técnicos y las experiencias alcanzadas por tales países con ya patrimonio universal -aunque por el uso de patentes industriales se tengan que pagar sumas considerables- y, por la otra, el capital que no acumularon por las causas expuestas anteriormente y que les es imprescindible para impulsar su desarrollo económico, pueden obtenerlo explotando directamente sus respectivos Estados los recursos naturales no-renovables depositados en sus subsuelos o por medio de la contratación, en condiciones aceptables, de empréstitos exteriores con destino a INVERSIONES REPRODUCTIVAS o con la coordinación de ambas fuentes de financiamiento. Los países sub-desarrollados que han emprendido resueltamente la construcción de sus economías nacionales, han contado, además, con el apoyo y la ayuda técnica y financiera que fraternalmente les ha suministrado el Mundo Socialista nacido en 1917.

Concretandonos a tal efecto a nuestro país, nadie podrá negar que él ha estado colocado en situación privilegiada por contar con enormes ingresos nacionales -los provenientes del petróleo- en relación a su pequeña población, lo que le permitiría - para enfocar el futuro- si fueran reducidos al mínimo los "gastos públicos corrientes", disponer de suficientes recursos para su desarrollo económico general, los que además podría aumentar considerablemente explotando, manipulando y vendiendo directamente por el Estado el petróleo, el gas, el hierro que son propiedad de la Nación, **Incluso** se podría recurrir al empréstito exterior para el financiamiento por el Estado y bajo su control de industrias básicas, para la construcción de la red ferroviaria, etc. en lugar de lo que las clases dominantes y el gobierno que las representa, están haciendo de endeudar a la Nación en el exterior para construir obras suntuarias de infraestructura y encubrir el interesado crecimiento acelerado del "gasto público corriente" y, mediante la constitución de "sociedades mixtas" y la celebración de "contratos de servicio", conservar y garantizarle al capital extranjero el control de la explotación del petróleo, del hierro, del gas, de la energía eléctrica, del aluminio.

Para 1939-40 la forma en que el Estado distribuía el ingreso petrolero y el incremento consecuencial de las importaciones, habían ocultado a la población venezolana, especialmente a la urbana, la realidad que el país venía confrontando en cuanto a su producción y distribución de bienes y de artículos. Ese velo en parte lo descorrería la interrupción del tráfico marítimo que, desde que se inició la Segunda Guerra Mundial, provocaría un descenso

progresivo de las importaciones, principalmente de las de alimentos, al punto de que si la guerra se prolongaba, el hambre tocaría a las puertas de los sectores pudientes de la población que hasta entonces se habían venido abasteciendo del exterior, indiferentes a la miseria y pauperización que sufrían no sólo los campesinos sino también las masas urbanas trabajadoras y los sectores de escasos recursos. Esa nueva situación determinó la instalación, desde 1940, en ciudades y pueblos, de grandes y pequeños talleres para la elaboración de diversos artículos y para la reparación de máquinas, gérmenes de futuras manufacturas y fábricas, así como que sectores de las clases dominantes, atemorizados, opusieran menor resistencia a la tradicional consigna del campesinado y por la cual habían luchado y derramado su sangre: la redistribución de la tierra entre quienes querían trabajarla, culminando el movimiento popular que planteaba la realización de una Reforma Agraria en la sanción por el Congreso, en septiembre de 1945, de una Ley Agraria que si bien instituía para los campesinos el derecho a ser dotados de tierra en propiedad, condicionaba el ejercicio de ese derecho dentro de límites tan moderados, que la transformación de la estructura agraria, de operarse, lo sería con suma lentitud. Sin embargo, los trusts imperialistas presintieron en la aplicación de esa Ley una amenaza a sus intereses, ya que no obstante su moderación, reforzaría el movimiento nacionalista que ya había logrado algunas conquistas, entre ellas la disposición de la Ley de Hidrocarburos de 1943 que obligaba a las compañías petroleras a pagar el Impuesto sobre la Renta, reduciéndoles sus superbeneficios y que, al aumentar la participación de la Nación, contribuiría a impulsar el incipiente desarrollo industrial generado por la interrupción del tráfico marítimo. Para impedir que la Ley Agraria entrara en vigor, los trusts imperialistas fraguaron el golpe de Estado de 18 de Octubre de 1945, derogando el Gobierno de facto que asumió el poder la recién promulgada Ley de Reforma Agraria. El Comunicado del 3 de Noviembre de 1946 del Instituto de Inmigración y Colonización (ITIC) es muy esclarecedor al respecto:

"A raíz de la instalación del Gobierno Revolucionario, la agitación campesina llegó a tener un clima INSURRECCIONAL, provocada por la demagogia hecha en torno a una proyectada reforma agraria, ofrecida por el partido derrocado para distraer a la opinión pública de la -- farsa a cumplirse con motivo de la sucesión presidencial. A EVITAR el estallido de esa INSURRECCION CAMPESINA se abocó el Gobierno Revolucionario sin recurrir a extremos que contrariasen los principios ético-sociales tenazmente sustentados en la oposición por sus integrantes y sin provocar trastornos a la economía nacional que impidiesen al CAPITAL PRIVADO -léase a los trusts imperialistas- tener la necesaria confianza para invertirse en forma útil, como lo ha hecho, amparado por el clima de seguridad logrado por las medidas tomadas por

aquéel en su primer año de administración..."

El Congreso elegido en 1947 promulgó otra Ley Agraria, pero en la que fue sustituido el derecho de los campesinos a ser dotados de tierra en propiedad -tierra para quienes la trabajen- por el goce en usufructo de tierras que serían arrendadas a los latifundistas y que sería entregada a unas Comunidades Agrarias. Instauraban así el lema de "dotar de hombres a la tierra", ya que el problema de Venezuela, según los promotores de esa Ley, no consistía en transformar la estructura agraria, sino en aumentar la producción". Por segunda vez en nuestra historia- a Guzmán Blanco, como vimos, correspondió la primera- la construcción de una economía nacional, independiente, fue frustrada por la acción combinada de sectores de las clases dominantes -uno de sus partidos y un grupo de oficiales del ejército- con las fuerzas del capital extranjero colonizador.

Durante los años de la tiranía perezjimenista al ITIC lo transformaron en Instituto Agrario Nacional y fueron creadas varias Colonias, entre ellas la de Turén, en torno a la cual se iniciaría el desarrollo de Portuguesa con la instalación en casas tierras de "empresarios agrícolas" que se dedicaron beneficiando con créditos otorgados por el Gobierno a los cultivos de algodón, ajonjolí, tabaco, maíz, etc. Pero la pervivencia del sistema de apropiación latifundista de la tierra y de sus inherentes relaciones de producción, así como el mayor incremento del "gasto público corriente", acentuarían aún más el éxodo de campesinos hacia las ciudades, en las que, por no poder ser absorbidos por la industria, cuyo desarrollo obstaculizaba la penetración imperialista, tenían que convertirse en población improductiva siendo cada vez mayor, en relación al total de la población, el número de personas activas en la producción, y por consiguiente, cada vez mayor el de las que, sin producir, debían ser alimentadas. No debe extrañar, por tanto, que huído Pérez Jiménez al exterior el 23 de enero de 1958, se planteara de nuevo la necesidad de realizar una Reforma Agraria como solución a los problemas que dejaba pendientes y ya no sólo como medio de hacer justicia a los campesinos, aumentar la producción agropecuaria, mejorar las condiciones de vida a las masas trabajadoras, sino como básica para el desarrollo de la economía nacional. Pero una vez más el tantas veces traginado mito de las soluciones formalistas -"el ensayo democrático", "la elección directa del Presidente de la República", "la celebración de elecciones"- estrangularía la lucha y la movilización de las fuerzas progresistas requeridas para alcanzar objetivos de transformación. La palabrería altisonante, huera, pequeño burguesa que proliferó en partidos y prensa durante todo ese año, serviría de espeso telón tras el cual las clases dominantes y los agentes del imperialismo maniobrarían exitosamente para mantenerse en el poder, profundizar y fortalecer su dominación y mediatizar aún más al país por el capital extranjero. Y ha

sido la proyección de esa realidad en los siguientes años lo que no sólo explica que la Ley de Reforma Agraria sancionada en marzo de 1960 no haya sido aplicada por el Ejecutivo Nacional en sus disposiciones fundamentales y, en consecuencia, que la Reforma Agraria no haya marchado, sino también el carácter regresionista y antinacional del proceso económico, social y político que desde entonces ha venido teniendo lugar en el país.

- II -

La Junta de Gobierno, no obstante, en septiembre de ese año designó una Comisión para que elaborara un anteproyecto de Ley de Reforma Agraria, Comisión que a pesar de su heterogénea composición se abocó a integrar en un solo cuerpo de Ley las disposiciones que juzgó conducentes a solucionar los diversos y variados problemas que implicaba la transformación de la perviviente apropiación latifundista de la tierra en una nueva estructura agraria que favoreciera la liberación de las fuerzas productivas en el campo, impulsara el desarrollo económico general del país y lo sacara de la situación de subdesarrollo en que se encontraba, plasmando su trabajo en un anteproyecto que para su discusión y sanción, fué introducido al Congreso Nacional en mayo de 1959. En esa iniciativa y resultados -tiempo de elaboración y contenido del anteproyecto- influyó la agudización a que habían llegado las contradicciones entre lo nacional -en sus aspectos económicos, sociales y políticos- y la penetración imperialista, en decir, la realidad de la alarmante insuficiencia de la producción agropecuaria -cereales, verduras, leche, carne, huevos, etc.- de las exorbitantes importaciones y el correspondiente escape de divisas al exterior, las crecientes necesidades de la incipiente industria nacional, del alarmante crecimiento del éxodo campesino, del fracaso de los "planes de emergencia" que el Gobierno aprovechaba como paliativos para debilitar la presión que las masas depauperadas ejercían para obtener soluciones a sus problemas, etc. Todo ese conjunto de candentes problemas estuvo presente en las deliberaciones de la Comisión de Reforma Agraria, al punto de que los representantes de los grandes propietarios de tierra opusieran resistencia menos violenta de lo que podía esperarse de ellas.

Fundamentando el objetivo de la Ley en el hombre, pero no en el hombre aislado, en el campesino indefenso, sino en el hombre activo en la sociedad y para actuar en la construcción de la economía general del país, la Comisión dejó sentado en el Título Preliminar -De las Bases de la Reforma Agraria- Artículo Primero del Anteproyecto, que:

"La presente Ley tiene por objeto la transformación de la estructura agraria del país y la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político de la Nación, mediante la sustitución del sistema latifundista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra basado en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización del crédito y la asistencia integral para los productores del campo a fin de que la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad."

Es decir, que para realizar la transformación de la estructura agraria e incorporar a la población campesina al proceso de la producción -objetivos de la Ley- deberá ser sustituida la apropiación latifundista de la tierra por un sistema de pequeña y mediana propiedad (Aparte e del Artículo 2º) mediante la dotación a todo individuo o grupo de población campesina de parcelas en propiedad de tierras económicamente explotables, **PREFERENTEMENTE** en los lugares donde trabajen o habiten ((Aparte b del Art. 2º), o sea, en los mismos latifundios, los cuales para tal efecto deberán ser fraccionados, obligado el Estado, a fin de que los grupos campesinos así dotados se organicen en unidades económicas, sociales y políticas, a prestarles la requerida asistencia crediticia y de servicios de mercadeo, suministro, de almacenaje (Arts. 109 y 128), asistencia y servicios que la Ley declara de utilidad pública (Art. 200).

Muy brevemente nos referiremos a los artículos de la Ley que consideramos fundamentales, advirtiéndole que si de algunas disposiciones se desprende la evidencia de que la Ley de Reforma Agraria conlleva la organización y desarrollo de la producción agropecuaria, no por ello se la pueda confundir con una ley de reforma agrícola, pues lo que caracteriza tal tipo de reforma es aumentar la producción agropecuaria sin transformar la estructura de apropiación de la tierra, incluso reforzando la gran propiedad, tal como lo persiguen el imperialismo yanqui y sus agentes criollos con la ayuda de la "Alianza para el Progreso", aunque a ésta opongan todavía en algunos países cierta resistencia sus sectores latifundistas más reaccionarios.

La Ley subdivide las tierras en tierras pertenecientes a la Nación, los Estados, las Municipalidades, los Institutos Autónomos y en tierras apropiadas por particulares o de propiedad privada.

Las pertenecientes a la Nación, los Estados, Municipalidades, salvo las que estén destinadas al dominio público, la conservación de recursos naturales, las reservadas al ensanche urbano o industrial de las poblaciones, quedan afectadas a los fines de la Reforma Agraria (Arts. 10, 11 y 12) y, por

tanto, con ellas deberán ser dotados los campesinos que en ellas trabajan o habitan o que deban ser reubicados.

Las pertenecientes a particulares, salvo en las que se esten cumpliendo todas las obligaciones derivadas de la función social de la propiedad, también la Ley las afecta a los fines de la Reforma Agraria (Art. 22) y, por tanto, con ellas deberán ser dotados los campesinos que en ellas trabajan o habitan y que integran la mayoría de las tierras de propiedad privada las que deberán ser adquiridas por el IAN o expropiadas al ser objeto de una solicitud de dotación, pudiendo el propietario reservarse una porción de 150 hectáreas, en virtud de que la Ley establece que son inexpropiables los terrenos o fundos cuya extensión no exceda de 150 hectáreas (Art. 29).

El concepto de función social de la propiedad a que se refiere el Art. 99 de la Constitución Nacional, lo interpreta la Ley estableciendo en su Art. 19 que lo cumple el fundo en el que se reúnan TODOS los elementos esenciales siguientes: la explotación suficiente de la tierra; el trabajo y dirección personal por el propietario de la tierra; el cumplimiento de las disposiciones sobre recursos naturales renovables; el acatamiento a las normas jurídicas que regulen el trabajo asalariado.

El pago de las tierras que compre o expropie el IAN, se hará parte en efectivo y parte en bonos de una Deuda Agraria a cargo del IAN y garantizada por la Nación (Art. 172). La ley establece -Art. 24- que las tierras que sean adquiridas deberán ser económicamente explotables, no pudiendo realizar la adquisición sin que preceda un informe técnico favorable que compruebe ese requisito. Es de observar que en la generalidad de las adquisiciones hechas por el IAN ha sido violado ese artículo, tal el caso del latifundio Pimentel, por el que se pagaron 26 millones de bolívares cuando de su extensión de 12.000 hectáreas ni 6.000 son económicamente explotables.

La Ley garantiza al individuo y a los grupos campesinos el derecho a ser dotados de tierra, pero dedica su mayor atención a la dotación de los grupos con el objetivo de propender a la concentración de la diseminada población, hacer más accesibles a la población campesina la organización de la producción, los servicios crediticios, técnicos, sanitarios y educacionales y más eficiente la productividad de quienes sean dotados de tierra. Para ese efecto, por una parte las dotaciones comprenderán a más de la tierra destinada a las parcelas, la necesaria para la creación del Centro Poblado, su futuro, ensanche, construcción de edificios de uso común de los parceleros (Casa Municipal, Escuelas, galpones para máquinas, etc.), para potreros comunal (Art. 57) y, por la otra, que los dotados de tierra se organizarán -Art. 58-, en CENTROS AGRARIOS cuya administración estará a cargo de un Comité Administrativo elegido de entre los mismos campesinos y asesorado, mientras sea necesario, por un Director Técnico designado por el Instituto Agrario Nacional.

Al establecer el derecho de los campesinos a ser dotados de tierra en propiedad **PREFERENTEMENTE** en los lugares donde trabajan o habitan, y dar - preferencia de dotación a los campesinos constituidos en grupos, la Ley instituyó por una parte el fraccionamiento de los latifundios y, por la otra, la concentración de la diseminada población campesina en Centros Poblados y unidades de producción; disposiciones éstas a las que los comentaristas de la Ley no han dado la debida importancia, no obstante ser fundamentales, dada la realidad imperante en el campo venezolano, para que pueda ser lograda una verdadera transformación de la imperante estructura agraria. Como ya lo anctamos y es sabido de todos, los campesinos, desde la Colonia y salvo los que con posterioridad a la Independencia ocuparon tierras baldías, han venido trabajando o habitando en las grandes haciendas y hatos como "medianeros", arrendatarios, aparceros, ocupantes y, por consiguiente, dispersos y diseminados en la gran extensión de los 23 millones de hectáreas apropiadas por los particulares así como en los 67 millones de hectáreas de las tierras baldías de la Nación y en las ejidales de las Municipalidades. Como vimos es sabido de todos, además, en las tierras propiedad de particulares, salvo - contadas excepciones, no se cumple con todos los elementos esenciales de la función social de la propiedad, por lo que conforme a la vigente Ley, con las tierras de esas haciendas y hatos deberán ser dotados los grupos campesinos, obligados sus dueños a venderlas al IAN, quien deberá **expropiarlas** en caso de negarse a venderlas sus dueños. No esta demás recordar a este respecto, que la Constitución Nacional garantiza la propiedad privada, que prohíbe las confiscaciones y en cuanto a las expropiaciones que deberá pagarse la correspondiente indemnización al propietario. La Ley no podía ir más allá de lo pautado por la Constitución y, por ello, el específico carácter de reforma de la Ley.

Insistimos en recalcar que la realización de la Reforma Agraria reposa principalmente en la creación y eficiente funcionamiento de los **CENTROS AGRARIOS**, porque esos Centros además de núcleos de generación y organización de las actividades campesinas, serán al mismo tiempo la base sobre la que podrán organizarse y funcionar el sistema de créditos, los servicios de mercadeo de los productos de los parceleros y de abastecimiento y suministro a los productores rurales, servicio que al declararlos la Ley de utilidad pública, el Estado quedó obligado a prestarlos y a destinar las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Por el Art. 130 el Banco Agrícola y Pecuario deberá recibir de los pequeños y medianos productores, en consignación, en pignoración o para ser aplicado su valor al pago de los créditos, los productos provenientes de sus explotaciones, así como a garantizarles precios mínimos (Art. 131). En los Centros Agrarios el IAN deberá instalar plantas de beneficio, almacenes, "estaciones de máquinas" (Art. 79). Con el

fin de incrementar la economía de los campesinos, las parcelas se organizarán en forma de "granjas mixtas", y a tal efecto, "el IAN proporcionará a los beneficiarios, como ayuda de instalación, los medios para adquirir en cantidades adecuadas, los ganados, aves de corral, y cualesquiera otras clases de animales que favorezcan la economía de las familias campesinas" --- (Art. 81). Y ello, porque la sola dotación de tierra no genera una nueva estructura agraria. La población campesina dotada de tierra para que efectivamente sea "incorporada al desarrollo económico, social y político de la Nación", requiere del otorgamiento de créditos por el Estado que la libere de los prestamistas usureros y pulperos de pueblos y así pueda iniciar e incrementar la producción; requiere de la asistencia técnica para el mejor aprovechamiento de la tierra, escogencia de los cultivos más apropiados en cada región y hacer más productivo el trabajo y menos duro el esfuerzo a realizar; requiere de los servicios de almacenaje, de mercadeo, con remuneración efectiva para sus esfuerzos; requiere, en fin, de los servicios asistenciales para la defensa de la salud de la comunidad y de los servicios culturales para el perfeccionamiento de la personalidad y una mayor garantía de convivencia democrática.

Al examinar con criterio socio-económico el panorama del país, tenemos que llegar a la conclusión de que lo caracteriza el hecho de que sus fuerzas productivas se encuentran frenadas, coartadas por la forma de apropiación latifundista de la tierra y sus inherentes relaciones de producción y por la cada vez más generalizada y acentuada mediatización extranjera. Al declarar de utilidad pública los servicios de crédito, mercadeo, etc. y establecer las disposiciones pertinentes para su organización y aplicación, la Ley de Reforma Agraria forjó solución para la liberación de las fuerzas productivas, ya que el intercambio de los respectivos productos entre las ciudades y los campos es básico para la imprescindible sincronización de la producción agropecuaria con la industrial y artesanal. La anarquía y el despilfarro que provocan la competencia y la especulación inherentes al sistema basado en el lucro individual, serían contrarrestados, en beneficio de los productores y de los consumidores, con la creación y funcionamiento por el Estado -Art. 120-, en escala nacional, de una red de establecimientos que, partiendo de los Centros Agrarios, se encargara de la distribución de los productos agropecuarios en los mercados urbanos, así como del suministro a los productores rurales de los artículos manufacturados de las ciudades. Una tal red de establecimientos simplificaría, además, el servicio de créditos y, al reducir el volumen de moneda en circulación, facilitaría en gran manera el financiamiento de la Reforma Agraria, ya que los beneficiarios de crédito en lugar de dinero en efectivo, recibirían los artículos de consumo necesarios para su subsistencia y

los requeridos para su trabajo y producción (implementos y útiles de labor, semillas, abonos, etc.)/ En cada CENTRO AGRARIO un establecimiento -Bodega, Tienda, Pulpería, como se lo quiera llamar- cumpliría las funciones de Agencia del Banco Agrícola y Pecuario para la tramitación, entrega y recuperación de los créditos, para la compra de los productos de los parceleros y para la venta a ellos de los suministros y, mediante un simple sistema de "cuentas corrientes" (Art. 117) cada campesino o cooperativa estaría en posibilidad de realizar sus diversas operaciones en forma práctica y eficiente, sin tener que manipular moneda y liberado de las garras de los especuladores y acaparadores locales. Esa red de establecimientos, a más de servir para organizar y asegurar el intercambio de artículos entre los productores del campo y los de las ciudades, propendería al abaratamiento de la vida al quedar, como consecuencia, eliminados los intermediarios y especuladores **que** la encarecen y, en fin, sería fuente para la acumulación del capital nacional.

Si los campesinos que sean dotados de tierra no son organizados en -- CENTROS AGRARIOS y no es creada y puesta en funcionamiento por el Estado la red de establecimientos que asegure el intercambio de productos, las fuerzas productivas no serán liberadas y continuaran malgastandose los recursos que se destinen a la reforma, estancándose el proceso e incluso, **re**forzadas atrasadas relaciones de producción en el campo. El proceso de la producción agrícola obedece a las mismas leyes económicas que rigen la producción industrial, aunque sometida a condiciones que la hacen más penosa (sequías, inundaciones, rápido deterioro de los productos, deficiencias de vías de comunicaciones y de transportes, etc.). La vigente Ley de Reforma Agraria -y es su mérito- basándose en esas leyes económicas y en las experiencias de otros pueblos, adaptó su articulado y las formas de resolver los diversos y complejos problemas, a la realidad venezolana. No es una Ley de exclusiva proyección de justicia social ni de incremento de la producción agrícola. Concentrando a la población diseminada, disponiendo la creación de los Centros Agrarios -núcleos básicos de desarrollo de la sociedad y de sus interrelaciones de producción y distribución- devino una ley de construcción de una economía nacional independiente; una ley de integración nacional.

Pero las clases deominantes entregadas al imperialismo y los partidos políticos que las representan en el aparato del Estado, empecinadas en conservar privilegios y cananjas han opuesto y continuarán oponiendo tenaz resistencia a que se realice una tal Reforma Agraria, conjurandose, al efecto, en un clandestino pero poderoso frente que va desde los latifundistas, los grandes y medianos "empresarios agrícolas", los agentes de la mediatización extranjera, los burócratas al servicio de unos y otros hasta los pulperos

y prestamistas de pueblos, los "camioneros" y demás individuos y sus organizaciones que de una u otra manera se benefician con la pervivencia de las atrasadas relaciones de producción y de intercambio comercial predominantes en el campo. Puede afirmarse que si en estos últimos años no han sido aplicadas las disposiciones fundamentales de la Ley de Reforma Agraria por los organismos expresamente designados para realizarla, ello no ha sido por deficiencias de la Ley, como cínicamente lo han aducido, sino porque esos organismos han actuado en cumplimiento de una política consecuentemente planificada y encaminada a impedir la transformación de la atrasada estructura agraria; encaminada a impedir se realice la Reforma Agraria reclamada por el país y particularmente por los campesinos empeñados en alcanzar el bienestar a que tienen derecho y que por siglos se lo han venido negando las clases explotadoras.

Y esa política, resistencia y oposición sólo podrán ser vencidas y aniquiladas en la medida en que los campesinos, los obreros y los sectores avanzados de la pequeña burguesía y de la burguesía industrial nacional, sobre cuyos hombros descansa la realización de la Reforma Agraria, intensifiquen la lucha por el cumplimiento integral de la Ley y que sean desplegadas las iniciativas creadoras de las **basas**. Los Comités Campesinos no deberán limitar su acción a elaborar las solicitudes de dotación de tierra; sobre la marcha es necesario que lleven a la práctica actividades tendientes a formalizar la posesión de la tierra en que trabajan o habitan y a la que la Ley les dá derecho, a organizar los Centros Agrarios, la producción, la construcción del Centro Poblado, a resolver los problemas de relaciones sociales, de abastecimiento de la comunidad, de la venta de los productos. Pero para la realización de esas tareas y debido al aislamiento entre ellos en que el sistema de gran apropiación de la tierra los ha mantenido, los campesinos venezolanos requieren la solidaridad y combativa ayuda de los obreros y de los sectores progresistas. De la comprensión de ese deber y del impulso que se imprima a la acción, dependerá, en definitiva, el ritmo creciente o retardado en que se realice la Reforma Agraria en nuestro país, porque la ley es sólo un instrumento y de por quien y cómo sea aplicada derivarán los frutos que con ella se persiguieron.